

CONTENIENDO RESISTENCIA EN CHILE: FORMAS DE GOBERNAR/CO-OPTAR TERRITORIALIDADES PARA FINES EXTRACTIVISTAS EN TERRITORIOS MAPUCHE

Maria Ehrnström-Fuentes

Este estudio examina los diferentes tipos de mecanismos usados por el estado y las corporaciones transnacionales para gobernar a los miembros de las comunidades afectadas o amenazadas por extractivismo en su territorio. Basado en estudios etnográficos, entrevistas y documentos oficiales del Estado y empresas forestales, el estudio identifica mecanismos claves de cómo los estados y corporaciones se comprometen a asegurar un consentimiento no violento de los gobernados en 'territorios en resistencia' (Zibechi 2012) contra el extractivismo. Los hallazgos apuntan a la naturaleza cambiante de controlar territorios basado tanto en inclusión por un lado y violencia por otro (zanahoria y palo). Entonces, las operaciones extractivistas funcionan a base de una relación enredada de múltiples actores y territorios, no solo de empresas y la comunidad local. Adaptando un marco de SLO brinda a los actores estatales y privados una sutil forma de gobernar comunidades resistentes, manteniendo una apariencia de acoger ideales democráticos incluyentes y participativos. Aunque estos mecanismos puedan parecer beneficiosos, también afectan la fábrica social de la comunidad e interrumpen procesos de auto-organización e independencia productiva (en este ámbito entendido como la capacidad de la comunidad misma de sostener la vida en el territorio que habita).

Introducción

En Chile, los encuentros violentos entre comunidades mapuche y el Estado ha estado recibiendo atención en los medios de comunicación en los últimos años. Las protestas mapuche han incrementado mientras las corporaciones y el Estado reclaman lo que tradicionalmente eran territorios mapuche. Las plantaciones forestales, la industria salmonera, los proyectos de infraestructura y los residuos de las instalaciones industriales continúan siendo una amenaza constante para la subsistencia y la cultura mapuche. Los movimientos locales han sido fuertemente reprimidos por el Estado, resultando en homicidios y abusos violentos en las comunidades mapuche. Muchos han sido encarcelados y procesados bajo la legislación vigente contra el terrorismo, remanente de la dictadura de Pinochet. Todo esto también ha provocado preocupación en las organizaciones internacionales de derechos humanos, llamando al Estado para que tome medidas para respetar los derechos de los pueblos indígenas (Inter-American Court of Human Rights, 2014; UN Human Rights committee, 2014; Amnesty International, 2017). Sin embargo, más allá de los encuentros violentos, también hay otra forma de control disciplinario sutil de las comunidades afectadas por las inversiones industriales y, que es mucho más difícil de detectar basándose en las noticias que emiten desde las zonas en conflicto. Esta sutil forma de dominación es promulgada no sólo por el Estado, sino también por las empresas que buscan acceso al territorio y recursos naturales, y se manifiesta bajo etiquetas tan benevolentes como programas gubernamentales de desarrollo y responsabilidad social corporativa (RSC),

utilizados para asegurar una "licencia social para operar" (LSO) supuestamente otorgada por los grupos de interés de la comunidad local.

LSO como concepto surgió originalmente en respuesta a la creciente oposición local a los proyectos de extracción de recursos naturales (Boutilier y Thomson 2012), originalmente en la minería, pero desde allí se ha extendido a otros sectores como también el sector forestal (Edwards y Lacey, 2014; Ehrnström-Fuentes y Kröger 2017). La creciente oposición local, ha obligado a las corporaciones a cambiar su enfoque desde una visión de maximizar el valor para los accionistas a también, contribuir o hasta compartir (Porter y Kramer, 2011) su valor agregado con los locales para garantizar relaciones pacíficas en la comunidad donde están ubicadas sus operaciones (Bice y Moffat, 2014, Owen y Kemp 2012, Parsons et al, 2014, Prno 2013, Sing 2014). Al contrario de la licencia operativa, se supone que la LSO no está otorgada por los estados ya que, para obtener una licencia *social*, es la comunidad y no el Estado quién responsabiliza a la empresa por sus acciones (Bice y Moffat, 2014, Edwards y Lacey, 2014, Gunningham et al 2004, Hall y otros, 2015, Melé y Armengou, 2015, Parsons y otros, 2014, Prno y Slocombe, 2012). El enfoque del concepto está en "la meta compartida tanto para la industria como para las partes interesadas de la comunidad / ciudadanía en la negociación de propuestas de desarrollo" (Hall et al., 2015). Como tal, el enfoque está en la colaboración entre comunidades y empresas para crear un ambiente favorable y libre de conflictos, contribuyendo así al bienestar de la comunidad a través de programas de desarrollo social (Bice y Moffat 2014; Harvey y Bice 2014; Y Franks 2014).

Sin embargo, el enfoque de ganar-ganar (win-win) de la LSO hace que la conceptualización de ella excluya perspectivas de aquellos habitantes que pierden si entran en una relación con la corporación inversora (win-lose) (Ehrnström-Fuentes, 2017). Esto indica que la LSO de hecho es utilizada para co-optar las comunidades vulnerables al interés de las corporaciones convenciéndoles así de aceptar operaciones no deseadas en sus comunidades (Esteves y Vanclay 2009, Westoby y Lyons 2016). Desde esta perspectiva, LSO es una herramienta para gobernar a las comunidades, utilizada para mejorar la legitimidad moral corporativa (Melé y Armengou, 2015), minimizando el riesgo de oposición local en la comunidad afectada por su operación (Martínez y Franks, 2014). Por lo tanto, para los movimientos con diferencias inconmensurables en términos de cómo vivir en el lugar en disputa y quienes luchan por la autonomía y la autodeterminación, LSO no es benevolente sino debe ser vista como una fuente de política de dominación y cooptación, con el objetivo de interrumpir y alinear los intereses de los movimientos con los de las corporaciones.

Como un proceso político de legitimar presencia, LSO es más que un mecanismo de gobernanza de sujetos políticos; sus efectos se sienten más allá del ámbito social de las relaciones humanas y por lo tanto la política que implica afecta también más que las subjetividades humanas. Cuando las corporaciones extractivas buscan asegurar su LSO en un territorio determinado, es el significado del mismo territorio y de las identidades que habita ese lugar que se encuentra en el centro de la lucha (Bebbington et al 2007, Escobar, 2008, 2011). Por lo tanto, LSO busca gobernar no solo

identidades pero "territorialidades", la compleja relación total de identidades en su relación con el territorio que habita (Porto-Gonçalves, 2009). Como tal, los procesos para asegurar una LSO deben entenderse como políticas de "territorialización" (Porto-Gonçalves, 2009); son políticas sobre quién tiene derecho a definir y reivindicar los significados de los territorios en disputa. Es una lucha entre aquellos que desean llenar el territorio con significados vinculados al extractivismo (desarrollo, progreso, extracción de recursos; modernidad/(colonialidad)) y aquellos quienes quieren convivir con el territorio como un sitio de reproducción cultural y material (Escobar, 2008; 2011), para la creación de una autonomía auto-organizada (Reyes y Kaufman 2011). Estos no son sólo significados, sino que como los territorios están involucrados, la forma en que la vida cotidiana se lleva a cabo en relación con los territorios juega un papel importante en marcar los límites político (límites político en el sentido de las posibilidades del actor de poder imaginar y legitimizar sus acciones y voluntades) de los actores involucrados. (Ehrnström-Fuentes, 2016a). Sin embargo, exactamente cómo la LSO se manifiesta como una política de territorialización es un área que necesita más atención en el debate actual sobre las relaciones entre las empresas y la comunidad.

Además, aunque raramente se menciona a los estados-nación como parte en la negociación de los SLO, todavía mantienen el poder soberano sobre territorios ubicados dentro de su jurisdicción. Sin embargo, las intervenciones comunitarias que emergen de el Estado y de las corporaciones están entrelazadas en el freno de la resistencia en las comunidades locales. Como se ha señalado en otro lugar, en el extractivismo, es más común que los estados nacionales se asocien con las corporaciones que con los locales, para promover el interés de la industria por encima de las de las comunidades locales (Acad., Gudynas, 2012; Lo que esto significa es que las estrategias empleadas que conducen a la obtención de un SLO en las comunidades locales no sólo pueden ser examinadas con base en intervenciones corporativas, sino que deben colocarse en un contexto más amplio de relaciones entre estados, corporaciones y actores locales. Actualmente, la mayoría de los debates sobre cómo los estados y las corporaciones se enfrentan y resuelven la resistencia de las comunidades locales, o bien se centran en las políticas estatales (por ejemplo, Banerjee 2010) o en las intervenciones corporativas (por ejemplo, Bebbington et al 2007, Gudynas 2012, Escobar, 2008, Kröger 2014, Zibechi, 2011, Ehrnström-Fuentes y Kröger 2017, Parsons et al., 2014, 2014, Prno, 2013, Prno y Slocombe, 2012, Owen y Kemp, 2012, Sing, 2015, Westoby y Lyons, 2016). Por lo tanto, es necesario ampliar la visión para entender la interacción entre estados, corporaciones y comunidades en las negociaciones sobre quién tiene el derecho de reclamar territorios para la reproducción de la vida o los intereses económicos.

En este estudio se examinan los diferentes tipos de mecanismos utilizados por el Estado y las corporaciones para poder gobernar territorios a fines extractivistas. Basado en estudios etnográficos, entrevistas y documentos oficiales de el Estado y empresas forestales, el estudio identifica mecanismos claves de cómo los estados y corporaciones se comprometen a asegurarse un consentimiento no violento de los gobernados en 'territorios en resistencia' (Zibechi 2012) contra el extractivismo.

Los hallazgos apuntan a la naturaleza cambiante de controlar territorios basado tanto en inclusión por un lado y violencia por otro (zanahoria y palo). Entonces, operaciones extractivistas funciona a base de una relación enredada de múltiples actores y territorios, no solo de empresas y la comunidad local. Adaptando un marco de SLO brinda a los actores estatales y privados una sutil forma de gobernar comunidades resistentes, mientras manteniendo una apariencia de acoger ideales democráticos de inclusión y participación. Encontramos que las nuevas formas de gobernar en la era de el extractivismo global (con gobiernos progresistas) se llevan a cabo mediante la gobernanza de imaginarios, la gobernanza de materialidades, y la gobernanza de procesos participativos (es decir, diálogos con grupos de interés, audiencias públicas, etc.). Tales intervenciones desestabilizan la organización local contra el extractivismo produciendo un consentimiento fabricado bajo la emblema de LSO. Lo que vemos en Chile es que la resistencia está creciendo no sólo en los territorios en disputa, sino también en el público en general. De hecho, el fracaso de las formas no violentas de gobernar, o el fracaso en lograr una LSO contribuye de manera significativa a la escalación de violencia estatal en los territorios mapuches. Cuando el LSO no es asegurada a través de formas no-violentas de gobernanza, el estado interviene y utiliza leyes antiterroristas para encarcelar y continuar la represión violenta del movimiento de resistencia mientras que sigue afirmando defender los ideales democráticos.

2. Marco teórico

En camino hacia autonomía: movimientos en movimiento

En términos generales, la lucha por la autonomía de los movimientos sociales se ha definido como luchar desde su propia posición sin interferencias de otros movimientos y sin subordinar sus demandas a otras prioridades externas (Scott citado en Boehm et al. 2010, mirar también Tricot, 2013; Reyes y Kaufmann 2011).

Boehm et al. (2010) identifican tres grandes líneas de autonomía del capital, la autonomía del estado y la autonomía de la dominación colonial y la dependencia del desarrollo. La lucha por la autonomía se refiere aquí al derecho a definir los significados y prácticas de los territorios que uno defiende. Sin un cierto nivel de autonomía frente a las dominaciones capitalistas, estatales y coloniales, los movimientos territoriales no pueden defenderse contra la maquinaria del Estado y de las corporaciones, sino que son fácilmente gobernados por quienes reclaman acceso a territorios. Esto significa que todas las líneas de autonomía están ligadas entre sí, ni una sin la otra.

Con respecto al movimiento Mapuche autonomista, Tricot (2013) sostiene que la autonomía, tanto del 'país' (territorial) como del 'mundo' (territorialidad) mapuche están a veces expresados de manera indistinta, lo que muestra su unicidad y carácter de totalidad y, ambos son clave para entender el movimiento autonomista mapuche:

“se aboca no solamente al despliegue de una matriz simbólica opuesta a la matriz simbólica dominante enarizada por su memoria ancestral, sino a la implementación de un repertorio de acciones que lo enfrentó directamente al Estado y las empresas forestales. A la territorialidad

chilena en su especificidad neoliberal se le opuso la territorialidad mapuche.” (Tricot, 2017; p. 295)

El territorio mapuche, entonces, “constituye un constructo social y espacio de disputa, espacio de poder donde confrontan la memoria, la identidad, el idioma, la historia, la cultura, la cosmovisión y la vida chilena. En este sentido, uno podría argumentar que el País Chileno no es igual que el País Mapuche, el País Forstal no es igual al País Mapuche. El País Chileno es novel, el País Mapuche es milenario.” (Tricot, 2013, p.. 296).

Dicho esto, quiero señalar que no considero que las luchas territoriales siempre ocurren en un modo blanco y negro. En su organización, los movimientos están fragmentados y dispersos (Zibechi 2012; veanse cuadro de Tricot, 2013 p. 327). El punto clave es la dirección del movimiento: la organización consiste en permanecer en movimiento, moviéndose hacia una mayor autonomía territorial (Zibechi, 2012). Ese movimiento es una expresión de vivir constantemente en la frontera de dos mundos en constante (re-)construcción, lo que en el caso mapuche significa interpelar “las políticas asimilacionistas e integracionistas del Estado chileno para situarse, como una realidad al parecer ineludible , en las fronteras de la autonomía” (Tricot, 2013, p. 396). Y entonces, para dominar el movimiento, o contener la resistencia, sigue la necesidad por parte del estado chileno (o empresas extractivistas) de interrumpir ese intento de reconstruir un mundo (y país) autónomo.

Co-optación – interrumpiendo el movimiento de el movimiento

En 1948, el sociólogo Philip Selznick introdujo el concepto de cooptación como un "estado de tensión entre la autoridad formal y el poder social" (Selznick 1948, p.35). Los académicos han definido la cooptación como la capacidad de una corporación de "alinearse los intereses de un grupo desafiante con sus propios objetivos" (Trumpy 2008, p.480). También, en investigación de marketing al consumidor, se entiende co-optación como el mercado capitalista *transforma los símbolos y las prácticas de movimientos contraculturales a una constelación de mercancías de moda y estilos despolitizados que se asimilan fácilmente a la corriente principal de la sociedad* (Thompson y Coskuner-Balli, 2007, p.136). En el caso forestal extractivista, se verá más adelante como las empresas usan esta táctica involucrando a productores locales y artesanales para convertir su trabajo manual en productos de alto valor agregado, o como se usa el producto folklórico de la cultura indígena para comercializar el multiculturalismo a gran escala.

El término es también usado en la literatura sobre organizaciones sin fines de lucro (Buchell y Cook, 2013, Trumpy 2008, Crane y Matten 2007). Sin embargo, ninguna de estas teorías considera cómo la cooptación también afecta territorialidades. La comprensión de la cooptación desde una perspectiva amplia, de redes estatales-corporativas-territoriales, es importante en el contexto de extractivismo, ya que los movimientos territoriales quienes resisten extractivismo surgen y se organizan a base de sus lazos al territorio que habitan (Ehrnström-Fuentes, 2016b). Adicionalmente, las relaciones del sector privado con Estado son fundamentales para legitimar el extractivismo, mientras el Estado aún mantiene el poder jurídico (y de coerción 'legítima') en los

territorios donde las empresas reclaman espacios para proyectos extractivos (Ehrnström-Fuentes y Kröger, obras en curso).

Zibechi (2012) se dedica en gran medida a las discusiones sobre cómo los mecanismos de uso de la cooptación neutralizan los movimientos auto-organizados y autónomos que emergen desde abajo. Como ejemplos de cooptación, menciona cómo la izquierda política ha contribuido al debilitar de los movimientos populares e indígenas involucrando sus líderes en su programa de gobierno. También menciona cómo las organizaciones locales y líderes sociales son cooptados a nivel local a consejos de barrio controlados por el Estado. Además, listando los pobres en proyectos de desarrollo y mediante la implementación de políticas gubernamentales dirigidas a la reducción de la pobreza, el gobierno de izquierda puede controlar las luchas sociales desde abajo. También menciona maneras más sutiles de controlar los debates políticos, tales como la cancelación de reclamaciones, redirigiendo la atención sobre el tema que se disputa hacia temas que son del interés de los que gobiernan.

Para evitar estas formas sutiles de co-optación y mantener su curso hacia la autonomía, los movimientos necesitan trabajar simultáneamente en tres dimensiones: 1) en el nivel imaginario donde el enfoque es descolonizar 'el conocer' y 'el ser' de constructos modernos, desligar el significado del territorio a través de cómo saber y cómo se relaciona al lugar; 2) el movimiento en el nivel material, donde el enfoque es desligarse 'del hacer' dependiente de jerarquías de dominación o de extractivismo (de mercados globales a redes locales); Y 3) el movimiento en el nivel político, construyendo nuevas formas de "política desde abajo" (Zibechi, 2012, p.127) que desafían las viejas formas de hacer política en las jerarquías del Estado-nación (deliberación).

2.1. Gobernando territorialidades – dimensión imaginario

La imaginación personal y colectiva de cómo vivir la vida en territorios define los contornos de la lucha política en favor o en contra del extractivismo. En otras palabras, las imaginaciones vinculadas al lugar definen la aceptabilidad y la moralidad de los proyectos extractivos en el ámbito local (Ehrnström-Fuentes 2016a). Esto significa que la forma en que las personas imaginan su lugar en el mundo ahora y en el futuro es fundamental para la gobernanza de los territorios.

El concepto de colonialidad (Quijano 2000) es útil para exponer la sutil forma de gobernanza de imaginaciones. La colonialidad del conocimiento funciona a nivel de la epistemología cuando se da prioridad a la racionalidad moderna sobre otras formas de conocimiento. Al afirmar la validez universal (y la superioridad) esta racionalidad suprime las historias locales, los conocimientos locales y las prácticas locales, y así mismo esta racionalidad restringe el campo de las posibilidades en términos de lo que se puede conocer (Mignolo, 2011). La "Colonialidad del Ser" (Maldonado-Torres 2007) se internaliza a nivel ontológico del sujeto y se refiere tanto a lo vivido, experimentado desde la colonización, como al impacto que esa colonización tiene sobre la mente, el lenguaje y los significados. Cuando las imaginaciones territoriales son gobernadas / cooptadas por la colonialidad, se producen subjetividades que creen en los beneficios de proyectos de desarrollo extractivos en sus propios

territorios (Escobar 2008), escondiendo la lógica de la colonidad o el sufrimiento colonial de los que están obligados a vivirlo. La colonialidad no se limita al uso de una determinada entidad (estatal o corporativa) sino que se reproduce en diferentes forma a través de los discursos dominantes de la sociedad moderna (Mignolo, 2011).

Misoczky y Böhm (2013) identifican las intervenciones a nivel imaginario que tienen lugar a través de retóricas corporativas y campañas publicitarias que promueven una "minería sostenible, participativa e inclusiva" y describen las operaciones mineras como "limpias, seguras y sostenibles" (327). Basándose en estos hallazgos, observan que "en las representaciones de los medios de comunicación, la minería suele presentarse como parte de la evolución de la humanidad, como expresión de evolución y progreso, como sinónimo de desarrollo. Se afirma que la minería tendría muchos impactos positivos para las economías locales, particularmente las que están situadas en territorios vacíos, en regiones económicamente deprimidas y sin otras oportunidades. Para estas regiones, los proyectos de mega-minería serían la única manera de salir de la pobreza." (P. 327)

Este extracto ilustra la relación enredada entre intereses corporativos y el estado-nación moderno: ambos están preocupados de reducir la pobreza y mejorar el desarrollo económico. Además al legitimar la minería como un medio para abolir la pobreza y crear oportunidades económicas, este tipo de "retórica moderna" (Mignolo 2011) contempla llenar los "territorios vacíos" con la imaginación moderna, mientras ignora otras historias y modos de vida que no siguen la misma lógica pero que habitan estos mismos territorios (Ehrnström-Fuentes 2016a), territorios que están lejos de vacíos, solo absentes en el imaginario moderno (de Sousa Santos, 2013).

2.2 Gobarnando territorios – la dimension material

Que tipo de sistemas de producción están radicados en un lugar y todas las relaciones que el lugar tiene con los mercados capitalistas impactan de manera muy concreta cómo las comunidades se pueden movilizar y unirse contra la amenaza del extractivismo (Ehrnström-Fuentes 2016a). Reyes y Kaufman (2011) mencionan las ocupaciones de la tierra utilizadas por los zapatistas en México para garantizar y fortalecer su autonomía: "el nuevo territorio zapatista se convirtió no sólo en un escape de la explotación laboral directa y un medio independiente de subsistencia, para la creación de autonomía, para la creación, el sustento y el crecimiento de un sujeto colectivo auto-organizado" (p.519).

Van den Hombergh (2004) ha señalado cómo la llegada de las plantaciones forestales en Costa Rica restringió y fijó a los productores locales al cultivo de sólo plantaciones de árboles en tierras que previamente habían sido capaces de cambiar los cultivos con el tiempo. Sus hallazgos muestran cómo los territorios se fijan una vez que la tierra ha sido ocupada por plantaciones de árboles que sirven a las necesidades e intereses corporativos.

Entonces Gobernanza mediante intervenciones, sea a través de la introducción del modelo extractivista como tal o sea intervenciones complementarios de programas de desarrollo para el resto de la población, crea dependencias y suprime modos alternativos de subsistir, así restringiendo cómo la comunidad

puede reproducir sus vidas en su comunidad. También causan divisiones como señala Rivera Cusicanqui a base de sus observaciones en Bolivia:

"El modelo de desarrollo depende de la expansión de el componente comercial de la economía comunitaria para resolver lo que considera como la" restricción "intrínseca del mundo indio. Peor aún, puesto que los programas no llegan a todas las familias, causan divisiones dentro de la economía Comunidades que, junto con la comercialización, aceleraron la descomposición de la estructura de la comunidad "(citado en Zibechi 2012, p.271, traducción de la autora)

Este tipo de relaciones de dependencia se reproducen también cuando las corporaciones se encargan de los programas de desarrollo a través de las actividades utilizadas para asegurar una SLO en la comunidad (Costanza, 2016; Jijileva y Vanclay, 2014; Sing, 2014). Sing (2015) describe cómo el tejido social en una comunidad cercana a una mina en Papua Nueva Guinea fue interrumpido cuando la compañía minera ofreció compensación a sólo una fracción de la comunidad local (un selecto grupo de terratenientes). La división de las comunidades que reciben compensaciones también se ha observado en otras comunidades que enfrentan amenazas similares (Ehrnström-Fuentes 2015; 2016a).

Esto significa que los movimientos en territorios que ya están afectados por la presencia corporativa enfrentan límites materiales concretos en términos que pueden hacer. En primer lugar, los efectos en términos de desposesión de tierra (o naturaleza contaminada) destruye cualquier oportunidad de subsistir independiente de los mercados monetarios y obligan locales a buscar empleo en las mismas industrias extractivistas (Ehrnström-Fuentes, 2016). En segundo lugar, cuando los lugareños se convierten en 'stakeholders', como empleados o beneficiarios de programas de desarrollo, se crean dependencias y divisiones en la comunidad que debilitan la organización de resistencia unida y efectiva (Ehrnström-Fuentes, 2016c).

2.3. Participatory politics -governing/Co-opting movements through the illusion of inclusion

Gobernanza en la época neoliberal, global y multicultural es un concepto de amplio uso (y significancia). De Sousa Santos (2009) sostiene que la gobernanza como modo de hacer política se ha convertido en un modo primordial para gobernar a la gente. Este modo de gobernar surgió como una respuesta a las movilizaciones sociales desde los años sesenta y en la era de la globalización neoliberal (de Sousa Santos, 2009). Tanto Zibechi (2012) como De Sousa Santos (2009; 2013) muestran a través de su trabajo cómo el significado de la "autoridad" está cambiando rápidamente en un mundo globalizado donde los gobiernos nacionales están perdiendo su capacidad reguladora (ver también Palazzo y Scherer, 2006; Scherer y Palazzo, 2007; Lee y Romano, 2013). Es en este "vacío" de reglas globales donde las corporaciones han elaborado sus propios modos nuevos de formas autorreguladas de gobernanza (Scherer y Palazzo, 2006). Una de las formas de gobernanza autoregulator y privado es la iniciativa del Forestry Stewardship Council (FSC). FSC es una iniciativa de colaboración entre múltiples grupos de interés que en conjunto definen las normas de operaciones forestales

responsables (McDermotte, 2012, Mena y Palazzo, 2012, Moog et al 2014, Schephers, 2010). También se utilizan herramientas de gobernanza colaborativa específicas a nivel de las empresas, como por ejemplo consejos comunitarios y las audiencias públicas, donde la empresa busca ganar su legitimidad a través del dialogo con grupos de intreses locales. Entonces, los sistemas colaborativos buscan a través del dialogo fomentar el apoyo local para operaciones extractivistas mientras tambien marginalizan la resistencia (visible) (Costanza, 2016; Ehrnström-Fuentes, 2016b, Balch, próximamente).

Sin embargo, lo que ocurre en la esfera de negociaciones políticas y deliberaciones públicas no está separado de la dimension imaginario y material. Los procesos políticos, los diálogos y los debates que pueden surgir en la esfera pública están contenidos y constreñidos por las imaginaciones dominantes y las posibilidades materiales concretas de el lugar en disputa (Ehrnström-Fuentes 2016a, 2016b). Cuando el imaginario moderno estructura lo que se percibe como deseable y racional, tambien marginaliza y excluye cualquier punto de vista procedente de aquellos que encarnan otros mundos de vida no modernos (De Sousa Santos, 2013; Ehrnström-Fuentes 2015, 2016a). Es así como la inclusión crea la ilusión de decisiones legimitas, mientras que las posibilidades de incidir en las decisiones finales son muy limitadas para aquellos cuya racionalidad se considera irracional o inferior en el proceso (Ehrnström-Fuentes, 2015, 2016a). Lee y Romano (2013) señalan cómo canalizar la participación de maneras que generan simpatía por los tomadores de decisiones, y enmarcando la acción individual como más viable que la acción colectiva, concluyendo que el acto de "deliberar sutilmente remodelar la autoridad contemporánea" (p.735).

Entonces, los procesos participativos pueden ser utilizados como estrategias políticas para desmovilizar los movimientos. Ehrnström-Fuentes y Kröger (2017) han mostrado cómo los procesos participativos en del FSC silencian la disidencia a través del acto de deliberación (véase también Moog et al., 2014), afirmando que: "[e]n lugar de asegurar que una inversión se encuentre en un terreno ético y sostenible firme, libre de conflictos y aceptada localmente, el certificado coloca la realidad de un SLO rechazado en las sombras, y luego viste el escenario Como tener un SLO completo." (página)

Superando la ilusión de la inclusión, los movimientos deben encontrar estrategias políticas radicadas en el lugar y surgiendo desde abajo (Ehrnström-Fuentes 2016b, 2016c, Escobar 2008, Kröger, 2014, Zibechi, 2012); reforzando así la unidad y las posiciones de diferencia hacia el imaginario dominante. La política se convierte en la organización social de la reproducción de la vida en comunidad, fortaleciendo las relaciones que hacen posible desvincularse conscientemente de los mercados globales (Ehrnström-Fuentes, 2016c). Tal política es una reterritorialización de los imaginarios del movimiento, conscientemente reconceptualizando lo que significa habitar los territorios, conectando la identidad con el territorio. Es allí donde las nuevas territorialidades politizadas pueden surgir, a base de experiencias, conocimientos e historias locales. La defensa del territorio y formas de estar en ese territorio es una expresión de la capacidad de la comunidad de responder (ability to respond) a amenazas externas (Ehrnström-Fuentes 2016c). Las estrategias para llegar a la sociedad en general no ocurren en los espacios

institucionalizados formales de las políticas partidarias y tradicionales (Zibechi, 2012), o en los espacios formalizados de deliberación (Ehrnström-Fuentes, 2016b), sino en las redes de territorios en resistencia, subterráneas y translocales (Banerjee, 2011; McFarlane, 2009).

En fin, se puede concluir que el SLO como modo de gobernar territorios surge de las relaciones multidimensionales enredadas entre estados, corporaciones y comunidades, a través de la imaginación, la materialidad y la política de inclusión.

3. Metodología

La metodología seleccionada es cualitativa en su diseño y sigue un enfoque de estudio en el que los casos se consideran sistemas conectados (en lugar de unidades organizacionales) con un enfoque en el tema específico que se estudia (Langley y Rowey, 2006). La definición de estudios de casos, como sistemas conectados (bounded system), ofrece flexibilidad en cuanto a los métodos de recolección de datos utilizados (Langley & Rowey, 2006). El material fue recolectado en múltiples etapas en un período de cuatro años (2012-2015), y tiene una amplia gama de fuentes (ver cuadro 1). Para ser completado....

Fuente	Ubicación	Fecha
Página web MINEDUC	Entidad estatal	Abril 2017
Página web CONADI	Entidad estatal	Abril 2017
Página web CONAF	Entidad estatal	Abril 2017
Página web Forestal CMPC	Empresa privada forestal	Abril 2017
Página web Forestal Arauco	Empresa privada forestal	Abril 2017
Entrevistas FSC	Voces mapuche, afectados for forestación	Septiembre 2012
Entrevistas Mehuín	Opositores del ducto de la celulosa Arauco	2012 y 2015
Seminario universitario	Líderes movimiento lafkenche de Mehuín	Noviembre 2015
SEminario colegio primario	Líderes movimiento lafkenche de Mehuín	Diciembre 2015

Cuadro 1: Fuentes del material y los casos elegidos para análisis. NOTA IMPORTANTE: Las entrevistas no han sido ejecutadas con movimientos en defensa de territorios sino con grupos *defendiendo el mar* de la amenaza de un ducto tóxico. Esto es importante tomar en cuenta al momento de ejecutar el análisis. Posiblemente emitir en este estudio visiones que

emergen del movimiento en si mismo y solo enfocado el los programas estatales/empresariales usados para asegurar el LSO en territorios mapuche.

4. Antecedentes movimiento autonoma mapuche

En Chile, el movimiento mapuche ha tomado diversas formas desde los primeros encuentros con los españoles. Sin embargo, sólo después de que el territorio habitado por los mapuche fue conquistado por las fuerzas chilenas en 1883, los mapuches se vieron profundamente afectados por dos procesos entrelazados: las reducciones de territorios por la entrega de títutlos de merced , por una parte, y por otra, por la chilenización que afectaba las subjetividades, es decir las territorialidades (Tricot, 2013, p. 20, ver también Bengoa 2012, Pairican, 2013). Bengoa (2012) escribe: "La derrota mapuche significó la pérdida de su territorialidad, del reconocimiento de sus derechos sobre la tierra; Los chilenos - vencedores - no reconocían la propiedad indígena "(p.353). Observa que esto también significaba cambios en la forma en que reprodujeron su cultura (materialidad):

“Al ser encerraqdos en pequenos retazos de tierra, debieron cambiar su sistema de producción...La sociedad (Mapuche) del siglo XIX era rica en ganados y esa riqueza se expresaba en la platería que hombres y mujeres usaban ostentosamente....La derrota significó pobreza; hoy día la sociedad mapuche es una sociedad pobre.” (p. 362-363)

Así, ya en los primeros años después de la conquista, hubo fuertes intentos de integrar a los mapuches en la sociedad chilena en forma pacífica: a través de la "chilenización"; La evangelización, la educación y el servicio militar desempeñaron papeles centrales en los años anteriores a los setenta (Sierra, 2010). También había leyes especiales diseñadas para proteger a los indígenas, siempre con el pretexto de asimilar a la población en la cultura dominante (Sierra, 2010, p.218).

En la década de 1970, el gobierno de Allende preparó una reforma agraria con redistribución de la tierra a los pobres (incluido el Mapuche). Cuando Pinochet asumió el poder a través de un golpe militar en 1973, subastó estas tierras a compañías forestales privadas. Los bosques nativos fueron reemplazados por plantaciones de árboles industriales de pinos y árboles exóticos de eucalipto que agotaron la capa freática, causaron erosión del suelo y reemplazaron las especies nativas que fueron la base de la medicina mapuche, silvicultures y religión.

Además, durante la dictadura de Pinochet, las políticas de inversión no tuvieron que tener en cuenta a los lugareños, ya que no había principios de democracia reinante durante este período y muchos territorios rurales marcados por la violencia estatal (Sierra, 2010). Esto significa que la difusión de las plantaciones masivas de la industria forestal en las Regiones de Araucanía, Bio-Bio y Los Lagos se llevó a cabo sin debates públicos ni diálogos locales de consentimiento (Aylwin, 2007).

Desde el regreso de la democracia en 1990 se ha incrementado la presión sobre los territorios mapuches para que sirvan como comunidades de acogida de los recursos necesarios para crear crecimiento económico y desarrollo. A finales de los años noventa se generaron algunos de los conflictos más emblemáticos y visibles entre las comunidades y el Estado y las corporaciones extractivas, como la represa hidroeléctrica de Endesa con comunidades

Pehuenche en la región del Alto Bio Bio (Seguel, 2013) y el conflicto sobre el oleoducto con residuos tóxicos de una planta de celulosa de la comunidad costera de Mehuín (Seguel, 2007). Sin embargo, es la expansión del sector forestal en vastas áreas del territorio mapuche que más a llegado a influir en el surgimiento de una movilización mapuche masificada (Aylwin, 2007; Pairacan, 2013; Tricot, 2013).

En palabras de Aylwin (2000)

Cabe señalar que las prácticas forestales de estas empresas, que hasta ahora se han basado en la destrucción del bosque nativo para la exportación de astillas y en la tala rasa para la plantación de especies de rápido crecimiento (*Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*), han generado enormes impactos ambientales, entre ellos la erosión del suelo, la degradación y disminución de las fuentes de agua, y la significativa reducción de la flora y fauna con la que la cultura mapuche se ha relacionado desde antiguo. Todo lo anterior ha incidido en el empobrecimiento material y cultural de las comunidades mapuche y en la migración de sus integrantes hacia los centros urbanos 24 . No es de extrañar, entonces, que muchas de las movilizaciones y demandas mapuche en defensa de su derecho a la tierra y a un desarrollo compatible con su ambiente y cultura se hayan centrado en las industrias forestales que hoy los rodean. “ (Aylwin, 2000, p.)

A fines de la década de 1990, diferentes organizaciones mapuches empezaron a organizarse y trabajar hacia la autonomía (Aylwin 2007, Tricot, 2013, Pairacan, 2013). El movimiento entró en su modo activo con los acontecimientos de Lumako en 1997 (Pairacan, 2013; Tricot, 2013). A partir de ese momento se podría desnaturalizar claramente esa lucha por la autonomía centrada en la creación de un mundo mapuche a las territorialidades, a las identidades que habitan territorios) y un país Mapuche, referente a la geografía concreta, o al territorio donde esta cultura puede ser practicada en su totalidad (Tricot, 2013). Por lo tanto, la lucha por la autonomía trata de restaurar la relación tradicional con el territorio en oposición a todas las estructuras invisibles de la sociedad jerárquica chilena quien niega el mundo originario en su totalidad (Tricot, 2013). Esto significa que la lucha por el territorio no debe ser interpretada como una lucha singular puramente étnica o nacionalista, sino que permite reconstruir el mundo mapuche, con sus valores, principios y tener el espacio que permite a los habitantes evolucionar como pueblo , la cultura y la sociedad (Tricot, 2013).

A partir de 2000, la lucha comenzó a tomar formas más visibles como acción directa para recuperar el territorio mapuche (Pairacan, 2013; Aylwin 2007). Este es también el momento en que el movimiento se vuelve más visible en la política nacional (Aylwin 2007, Pairacan, 2013). En el cambio de milenio las movilizaciones habían crecido tan fuerte que el Presidente Lagos (1999-2005) necesitaba abordar ‘el problema indígena’ (Aylwin, 2007, p.24) utilizando una estrategia doble orientada por un lado a ‘beneficiar’ a la población originaria mientras por otro reprimiendo a los grupos radicales que amanezaban el desarrollo y el model economico neoliberal (Aylwin, 2007). Por lo tanto, el

gobierno de Lagos introdujo en 2001 el "Nuevo Trato", en el que el componente central era impulsar un desarrollo con identidad ('desarrollo con identidad') a través de la educación, el fortalecimiento sociocultural de los pueblos originarios, y la restitución de la tierra y el agua al pueblo mapuche (Aylwin 2007). Los proyectos fueron diseñados y dirigidos hacia áreas con conflictos más activos (Bello, 2007, p.221). Sin embargo, Lagos (al igual que todos los presidentes democráticamente electos después de la dictadura) siguieron respetando el modelo económico, "con su política de apertura de la economía chilena a los mercados internacionales, siguió respaldando proyectos de inversión radicados en los territorios de los pueblos indígenas, imponiendo su visión del desarrollo sobre las comunidades afectadas por los proyectos de los exámenes "(Aylwin, 2007)

En esta batalla entre quién tiene derecho a reclamar territorios y territorios (el Estado-nación desarrollista versus nación indígena revitalizada) las corporaciones han asumido un papel secundario, aunque es su presencia, y los efectos adversos de sus operaciones que es central a los conflictos en territorios (Aylwin, 2007; Pairacán, 2013; Seguel, 2007; Tricot; 2013). Desde que la criminalización del movimiento se ha vuelto más criticada por las organizaciones internacionales, y las empresas forestales han sido impactados por movilizaciones de ciudadanos (por ejemplo, el surgimiento del grupo 'Acción por los Cisnes' después que la empresa Arauco estuvo involucrada en la crisis emblemática de la muerte del cisne de cuello negro cerca de su fábrica de celulosa en Valdivia en 2004-2005) ambas empresas han respondido invirtiendo en CSR adicional y programas de "buenos vecinos" en las comunidades locales (entrevistas personales, Valdivia y Santiago, 2012).

Sin ignorar las formas de violencia brutal de parte del Estado que han dejado a las comunidades traumatizadas y vulnerables (González et al., 2007), en este estudio me enfocaré en las estrategias benevolentes, o las "zanahorias" (Aylwin, 2007, p. 25) . del Estado y las corporaciones que han servido para desmovilizar la resistencia y con el objetivo de establecer un LSO a favor de estas inversiones en las zonas de conflicto. En la discusión voy a volver a discutir el enlace entre un LSO con la criminalización del movimiento y los efectos de comunidades traumatizadas por el terror ejecutado por el estado mismo en estos territorios.

Resultados:

4.1 gobernando imaginarios y territorialidades

Programas estatales

- Sistema educativa, 1910-
- Ministerio de Educación, Programa Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) (Webb and Radcliffe, 2013)
- CONADI: Fondo Desarrollo Indígena; Fondo Cultura Educación, 2002
- Programa Originarios, financiado por préstamo del BID, 2002-

Programas empresariales

- Programa de Música de Forestal Mininco, denominado "Un Puente entre la Comunidad y su Cultura", 2007- 40 comunas

- Las iniciativas de educación de ARAUCO: la Fundación Educacional Arauco, los colegios Constitución, Cholguán y Arauco, el apoyo a la Fundación Belén Educa y los programas de fomento a la cultura.
- Programas dirigidos a comunidades Mapuche específicamente:
- Programa Permanente de Capacitación en Cultura Mapuche
- Registro e Identificación de comunidades mapuches relacionadas con Forestal Arauco
- “Talleres Tecnológicos de Mehuín” busca vincular a los jóvenes, las nuevas tecnologías de la comunicación y la información.

4.2. Gobernando materialidades y territorios

Estatal:

- Fondo de Tierras Indígenas de CONADI
- CONAF (?)
- Política del estado de distribución de ingresos, políticas neoliberales (manteniendo comunidades rurales empobrecidos)

Empresarial:

- Mininco: Proyecto » Emuladores
- Mininco Proyecto » Frambuesas en Rewe
- Arauco: Emprendimiento y Empleo Local
- Arauco: Infraestructura y Vivienda:
- Arauco: Compatibilidad y Diversificación Productiva

4.3 Gobernando procesos políticos

Estatal

- CONAMA, EIA, Audiencias públicas, 1997-
- CONADI, Ciudadanía participativa

Multi-iniciativa

- FSC, audiencias públicas

Empresarial

- Proyecto » Consultas Comunidad, Forestal Mininco
- Consulta Previa de Operaciones Forestales, Arauco
- Encuentros Públicos con Partes Interesadas, Arauco
- Consulta Comunitaria Comunidades Mapuche, Arauco
- Mecanismo para la gestión de quejas y resolución de controversias con comunidades Mapuche, Arauco

Bibliografía

Acosta, A. (2013) Extractivism and neoextractivism: two sides of the same curse. In Lang, M. (Ed.), *Beyond Development Alternative Visions from Latin America*. Quito: Rosa Luxemburg Foundation.

Amnesty International (2017) Annual report – Chile accessed online <https://www.amnesty.org/es/countries/americas/chile/report-chile/> (8th April, 2017)

Aylwin, J. (2007) Introducción. En: Aylwin, J. Yáñez, N.(eds) *El gobierno de Lagos, los Pueblos Indígenas y el “Nuevo Trato”* Santiago: LOM, 2007.

Balch, O. (forthcoming) *Asphalt Dreams*, Preview of Dissertation Thesis, Chapter 3.

Banerjee, S. B. (2010) Governing the Global Corporation: A Critical Perspective. *Business Ethics Quarterly*, 20, 265-274

Banerjee, S.B. (2011) Voices of the governed: Towards a theory of the 'translocal'. *Organization*, 18, 323-344.

Baur D., Schmitz H. P. (2012). Corporations and NGOs: When accountability leads to co-optation. *Journal of Business Ethics*, 106, 9-21.

Bello, A. (2007) El programa Orígenes y la política pública de Lagos hacia los pueblos indígenas. En: Aylwin, J. Yáñez, N.(eds) *El gobierno de Lagos, los Pueblos Indígenas y el "Nuevo Trato"* Santiago: LOM, 2007.

Bengoa, J. (2012) *Historia del pueblo mapuche siglo XIX y XX*. Santiago, Chile: Editorial Lom,

Bice, S. And Moffat, K. 2014 Social licence to operate and impact assessment, *Impact Assessment and Project Appraisal*, 32: 257-262.

Boutillier, R. and Thomson, I. 2012 From Metaphor to Management Tool – How the Social Licence to Operate can Stabilise the Socio-Political Environment for Business. Conference Paper presented at International Mine Management Conference 2012. Available at: http://www.accsr.com.au/pdf/Boutillier_Black_Thomson_From_Metaphor_To_Mgmt_Tool_FINAL_AUSIMM_PROCEEDINGS_20120802.pdf

Burchell, J., & Cook, J. (2013). CSR, co-optation and resistance: The emergence of new agonistic relations between business and civil society. *Journal of business ethics*, 115(4), 741-754.

Cashore, B. 2004 Legitimacy and the Privatization of Environmental Governance: How Non-State Market-Driven (NSMD) Governance Systems Gain Rule-Making Authority. *Governance* 15, 503-529.

Costanza, J. N. (2016). Mining conflict and the politics of obtaining a social license: Insight from Guatemala. *World Development*, 79, 97-113.

De Sousa Santos, B. (2012) Public Sphere and Epistemologies of the South. *African Development*, 1, 43-67.

De Sousa Santos, B. (2013) *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.

De Sousa Santos, B. (2009) Governance: Between Myth and Reality, RCCS Annual Review, Available at: <http://rccsar.revues.org/95>.

Ehrnström-Fuentes, M. 2015 Production of absence through media representation: A case study on legitimacy and deliberation of a pulp mill dispute in southern Chile. *Geoforum* 59, 51-62.

Ehrnström-Fuentes, M. 2016a Delinking legitimacies – a pluriversal perspective on political CSR. *Journal of Management Studies*, 53, 433-462.

Ehrnström-Fuentes, M. 2016b *Legitimacy in the Pluriverse: Towards an Expanded View on Corporate-Community Relations in the Global Forestry Industry*. Doctoral Disstertation. Helsinki: Hanken School of Economic.

Ehrnström-Fuentes, M 2016b Building 'conscious communities' based on circulation of life, EGOS Conference Paper presented in the sub-theme 58: Organizational Practices of Social Movements: The Power of Organizing from Below, Naples, July 7.

Ehrnström-Fuentes, M. and Kröger, M. 2017. In the shadows of social licence to operate: Untold investment grievances in Latin America, *Journal of Cleaner Production*, 142, 346-358

Edwards, P. and Lacey, J. 2014 Can't Climb the Trees Anymore: Social Licence to Operate, Bioenergy and Whole Stump Removal in Sweden. *Social Epistemology* 28, 239-257.

Escobar, A. (1995) *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton: Princeton University Press.

Escobar, A. (2008) *Territories of Difference: Place, Movements, Life, Redes*. Durham and London: Duke University Press.

Esteves, A.M. and Vanclay, F. 2009 Social Development Needs Analysis as a tool for SIA to guide corporate-community investment: Applications in the minerals industry. *Environmental Impact Assessment Review* 29, 137-145, <http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2008.08.004>

Fitzpatrick, P.; Fonseca, A, and McAllister, M L. (2011) From the Whitehorse Mining Initiative Towards Sustainable Mining: lessons learned. *Journal of Cleaner Production*, 19, 4, Pages 376–384

Gonzalez, K, Mella, E. Lillo, R. (007) La politica de criminilación del movimiento mapuche bajo el sexenio de Lagos. En: Aylwin, J. Yáñez, N.(eds) *El gobierno de Lagos, los Pueblos Indígenas y el "Nuevo Trato"* Santiago: LOM, 2007.

Groglopo, A. 2012 Appropriation by Coloniality - TNCs, Land, Hegemony and Resistance: The Case of Botnia/UPM in Uruguay. Doctoral Thesis, Umeå University, Department of Sociology.

Gunningham, N., Kagan, R., and Thornton, D. 2004 Social License and Environmental Protection: Why Businesses Go Beyond Compliance. *Law & Social Inquiry* 29, 307-340.

Gudynas, E. (2012) Estado Compensador y Nuevos Extractivismos. *Las Ambivalencias del Progresismo Sudamericano. Nueva Sociedad*, 237: 128–147.

Gudynas, E. (2013) Transitions to post-extractivism: directions, options, areas of action. In Lang, M. (Ed.), *Beyond Development Alternative Visions from Latin America*. Quito: Rosa Luxemburg Foundation.

Hall, N., Lacey, J., Carr-Cornish, S., and Dowd, A-M. 2015 Social licence to operate: understanding how a concept has been translated into practice in energy industries. *Journal of Cleaner Production* 86, 301-310.

Harvey, B. and Bice, S. 2014 Social impact assessment, social development programmes and social licence to operate: tensions and contradictions in intent and practice in the extractive sector, *Impact Assessment and Project Appraisal*, 32, 327-335.

Inter-American Court on Human Rights (2014) Case of norín catrimán *et al.* (leaders, members and activist of the Mapuche indigenous people) v. Chile accessed online http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_279_ing.pdf (8th April, 2017).

Jijelava and Vanclay 2014 Social Licence to Operate through a gender lens: The challenges of including women's interests in development assistance projects, *Impact Assessment and Project Appraisal* 32, 283-293. <http://dx.doi.org/10.1080/14615517.2014.933505>

Kröger, M. (2014) *Contentious Agency and Natural Resource Politics*. London: Routledge.

- Lee, C. and Romano, Z.. (2013). Democracy's New Discipline: Public Deliberation as Organizational Strategy. *Organization Studies*, 34: 5-6: 733-753.
- Maldonado-Torres, N. (2007) On the Coloniality of Being. *Cultural Studies*, 21, 240- 270, DOI:10.1080/09502380601162548
- Martinez, C. and Franks, D. 2014. Does mining company-sponsored community development influence social licence to operate? Evidence from private and state owned companies in Chile, *Impact Assessment and Project Appraisal*, 32 , 294-303,
- Matten, D., & Crane, A. (2005). Corporate citizenship: Toward an extended theoretical conceptualization. *Academy of Management Review*, 30 (1), 166–179
- McDermott, C. 2012 Trust, legitimacy and power in forest certification: A case study of the FSC in British Columbia, *Geoforum* 43, 634–644.
- McFarlane, C. (2009) 'Translocal assemblages space, power and social movements.', *Geoforum*, 40, 561-567
- Melé, D., and Armengou, J. 2015 Moral Legitimacy in Controversial Projects and Its Relationship with Social License to Operate: A Case Study, *Journal of Business Ethics*, published online October.
- Mena, S. and Palazzo, G. 2012 Input and output legitimacy of multistakeholder initiatives. *Business Ethics Quarterly* 22, 527–556.
- Misoczky, M C & Böhm, S. (2013) Resisting neocolonial development: Andalgala's people struggle against mega-mining projects, *Cad. EBAPE.BR*, v. 11, nº 2, paper 1, Rio de Janeiro, Jun. 2013, p.311–339.
- Moog, S., Spicer, A. and Boehm, S. 2014 The Politics of Multi-Stakeholder Initiatives: The Crisis of the Forest Stewardship Council. *Journal of Business Ethics*, May 1.
- Owen, J. and Kemp, D. (2013) Social licence and mining: A critical perspective. *Resources Policy*, 38, 29-35.
- Pairacan, F. (2013) *Malon. La rebelión del movimiento mapuche (1990-2013)* Editorial. Pehuen, Santiago.
- Palazzo, G. and Scherer, A. (2006) Corporate Legitimacy as Deliberation. A communicative Framework. *Journal of Business Ethics*, 66, 71-88.
- Parsons, R. Lacey, J. and Moffat, K. 2014 Maintaining legitimacy of a contested practice: How the minerals industry understands its 'social licence to operate'. *Resources Policy* 41, 83-90.
- Porto-Gonçalves, C.W. (2009) *Territorialidades y lucha por el territorio en América Latina –Geografía de los movimientos sociales en América Latina*. Caracas: Ediciones IVIC.
- Prno, J. 2013 An analysis of factors leading to the establishment of a social licence to operate in the mining industry. *Resources Policy* 37, 577-590.
- Prno, J. and Slocumbe, S. (2012) Exploring the origins of 'social license to operate' in the mining sector: Perspectives from governance and sustainability theories. *Resources Policy* 37, 346-357.
- Quijano, A. (2000) Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America, *Nepantla: Views from South* 1.3 533-580.
- Schepers, D. (2010) Challenges to Legitimacy at the Forest Stewardship Council, *Journal of Business Ethics*, 92:279–290.

- Scherer, A. and Palazzo, G. (2007) Toward a Political Conception of Corporate Responsibility: Business and Society Seen from a Habermasian Perspective. *Academy of Management Review*, 32, 1096-1120.
- Scherer, A. and Palazzo, G. (2011) The New Political Role of Business in a Globalized World: A Review of a New Perspective on CSR and its Implications for the Firm, Governance, and Democracy. *Journal of Management Studies*, 48, 899-931. DOI: 10.1111/j.1467-6486.2010.00950.x
- Seguel, A. (2007) Crónicas de desencuentros: Gobierno de Ricardo Lagos versus Movimiento social mapuche. En: Aylwin, J. Yáñez, N.(eds) *El gobierno de Lagos, los Pueblos Indígenas y el "Nuevo Trato"* Santiago: LOM, 2007.
- Selznick, P. (1948) "Foundations of the Theory of Organization. *American Sociological Review*. 13 (1): 25–35.
- Sierra, M (2010) *Un pueblo sin estado. Mapuche gente de la tierra*. Catalonia, Santiago.
- Sing, J. 2015 Regulating mining resource investments towards sustainable development: The case of Papua New Guinea. *The Extractive Industries and Society* 2, 124-131.
- Tricot, T. (2013) *Autonomía Mapuche*. Santiago de Chile : CEIBO ediciones.
- Thompson, C. J., & Coskuner-Balli, G. (2007). Countervailing market responses to corporate co-optation and the ideological recruitment of consumption communities. *Journal of Consumer Research*, 34 (2), 135–152.
- Trumpy, A. J. (2008). Subject to negotiation: The mechanisms behind co-optation and corporate reform. *Social Problems*, 55, 480–500
- Van den Hombergh H. G. M. (2004) *No stone unturned: building blocks of environmentalist power versus transnational industrial forestry in Costa Rica*. Amsterdam: Dustch University Press.
- Westoby, P. and Lyons, K. 2016 Privatising development and environmental management: undermining social license in the Ugandan plantation forest sector. *Environmental Sociology*, doi:10.1080/23251042.2016.1163963
- Zibechi, R. (2012) *Territories in Resistance*. Oakland and Edinburgh: AK Press.